

Conferencia Episcopal Ecuatoriana
Comité Pro Refugiados
Pastoral Migratoria del Vicariato de Esmeraldas

INVESTIGACIÓN:

“Línea de Base con indicadores en torno a las condiciones de acceso, ubicación, permanencia, y tipo de matrícula en el sistema educativo del país de los niños, niñas y jóvenes en situación de refugio que se encuentra en la zona urbana de los cantones Esmeraldas y San Lorenzo”.

RESUMEN EJECUTIVO

Enero 2007

Resumen Ejecutivo

La presente investigación pretendió detectar no solamente las condiciones en las que se encuentran los niños, niñas y jóvenes colombianos en Situación de Refugio, dentro del Sistema Escolar fiscal urbano de las ciudades de Esmeraldas y San Lorenzo, sino además recoger elementos sobre la problemática que vive esta población en la zona rural; no solo porque al igual que la población local que vive en esta zona, las condiciones de vida que enfrenta son extremadamente más difíciles que en la zona urbana, por la carencia de servicios y la ausencia del Estado civil de derechos; sino también porque es la que menos accede al registro de Cancillería y ACNUR, convirtiéndose en una población vulnerable con necesidades de protección; y que presumiblemente, es la más numerosa.

Realizar la investigación en Esmeraldas se volvía un imperativo para el Comité Pro Refugiados y el Vicariato Apostólico de Esmeraldas porque no solo que permitía avanzar en la comprensión de la problemática, estableciendo las semejanzas y diferencias de las condiciones que soportan en diferentes ciudades en base a las características específicas de ellas, sino que, de toda la zona de frontera, es la que menos se la vincula con la problemática colombiana y solo adquiere notoriedad cuando se suceden hechos como el ocurrido en noviembre del 2005 cuando se produjo el desplazamiento masivo de la población colombiana hacia San Lorenzo.

Por otro lado, Esmeraldas es una provincia rica en recursos naturales, minerales, agrícolas, forestales, ictiológicos, sin embargo, registra altos índices de pobreza que la colocan entre las más atrasadas del país; en la Costa solo superada por la provincia de Los Ríos y en la Sierra por la provincia de Bolívar. En Esmeraldas se cumple la paradoja señalada por Teodoro Wolf en 1892, cuando describió al Ecuador como un mendigo sentado en una roca de oro.

La poca relevancia que se le asigna a Esmeraldas en el problema de refugio de la población colombiana quizás se deba al hecho de la histórica presencia colombiana en la provincia de Esmeraldas; los lazos familiares, comerciales, no son resultado de un acercamiento dado por la convivencia, sino que tiene raíces más profundas que se ubican en el origen mismo de la población; Bernardita Clauvequin de la Pastoral Migratoria del Vicariato de Esmeraldas afirma que en época de la colonia la zona estuvo habitada por negros cimarrones que huían del trabajo en las minas, en las haciendas y formaron una pequeña república. “La presencia de los colombianos aquí no tiene ninguna novedad, la novedad ahora es la razón por la cual están llegando, antes venían para conocer, para visitar, para comerciar; ahora vemos que la gran mayoría viene huyendo de la situación de conflicto, de violencia generalizada que hay en Colombia y llegan a Ecuador como la última alternativa para salvar la vida de ellos y de la familia” dice.

Esta histórica presencia de población colombiana en la provincia de Esmeraldas y fundamentalmente en el Cantón San Lorenzo, determina la existencia de diferentes condiciones para la población en situación de refugio, tanto en sus posibilidades de integración a la población local, cuanto en el acceso al ejercicio de derechos como la educación y la salud etc.

Un primer elemento es que la mayor parte de la población que llega a Esmeraldas huyendo del conflicto colombiano es afro descendiente y por tanto comparte con la población local este elemento de identidad cultural, que le hace no solo mimetizarse sino integrarse más fácilmente, sin tener que enfrentar las discriminaciones étnicas presentes en otras ciudades.

Un segundo elemento es que, el abandono que ha sufrido la provincia por parte de los organismos del Estado y la tradicional ausencia del Estado civil de derechos, permite una suerte de “desinstitucionalización” que les permite vivir más fácilmente sin regularizarse; ya en el 2004 cuando se realizó el “Taller para la construcción del Programa Global en la Frontera Norte”¹ los actores locales reconocían esta realidad “parte de la población de la provincia está constituida por personas que nunca se preocuparon por registrarse en uno de los dos países; en nuestra provincia hay miles de personas que no se sabe si son colombianos o ecuatorianos, nunca se interesaron por ese tema. “En Esmeraldas hay colombianos que tienen años viviendo en la ciudad, tienen 4 o 5 hijos que son ecuatorianos, pero ellos nunca legalizaron su situación”.

El tercer elemento es que las condiciones de vida de la población local, fundamentalmente de los sectores empobrecidos de la sociedad, distan muy poco de las condiciones que enfrenta la población colombiana en situación de refugio que llega al país; lo cual hace que también las diferencias socio económicas desaparezcan y se vivan procesos mayores de solidaridad. (En esta provincia se cumple el adagio popular: donde comen 10 comen veinte).

Todos estos elementos permiten que la lectura que hace la población sobre la presencia de los refugiados es diferente a la que se realiza en otras ciudades del país “no es que vienen a quitarnos el dinero, no es que vienen porque acá van a estar mejor, lo que pasa es que Colombia está totalmente militarizada y la gente atemorizada, la gente sale, no porque le da la gana, sino porque tiene que salir para salvar su vida, en general es gente buena.”

De esta forma los colombianos que llegan a Esmeraldas si bien no sufren los efectos de la discriminación, presentes en otras regiones del país, se ven abocados a los mismos problemas de subsistencia que enfrenta la población de la provincia, “la hospitalidad tiene un límite porque la propia población de aquí tiene dificultades para vivir”, dice Bernardita Clauvequin; también Omar Quintana Comisionado del Defensor del Pueblo se refiere a este problema “sí esta parte del Ecuador carece de servicios básicos y no cuenta con posibilidades para satisfacer las necesidades de la población local, menos puede atender a la gente que llega en cualquier circunstancia acá a la provincia”.

Para la población en situación de refugio entrevistada, las principales dificultades que enfrentan en la provincia tienen que ver con los problemas de legalización, y luego la subsistencia, solo un 7% se refiere a problemas de discriminación y rechazo de la población local; incluso hay un 7% que plantea que sus dificultades tienen que ver más con las circunstancias en que se dio su éxodo, antes que con las condiciones de

¹ CRS.- Diócesis de Tulcán.- Programa Global para la Frontera Norte, 2004

acogida; “los ecuatorianos han sido muy lindos con nosotros”, dice una madre de familia”. Solo el 1% de entrevistados se refiere a la dificultad de acceder a la educación regular.

Estos elementos están también presentes con relación al acceso y permanencia en el sistema educativo de la población en Situación de refugio en Esmeraldas, pero sobre todo, se evidencia que San Lorenzo acoge sin barreras a la población colombiana; regulares o irregulares no tienen ninguna dificultad para insertarse en los planteles educativos y aunque la falta de papeles es un inconveniente, se observa un compromiso institucional por ayudar al estudiante para solucionar el problema.

Los mayores obstáculos para el acceso al sistema educativo son: por un lado, las propias condiciones económicas de la familia, que en muchos casos se ven obligadas a dejar de lado la educación por garantizar la sobre vivencia de la familia; por otro, las características socio culturales de parte de la población en situación de refugio que llega a la zona, pues se trata de campesinos con bajos niveles de educación que no valoran, ni priorizan la formación de sus hijos.

Pese a la acogida que brinda los planteles educativos, hay un alto índice de deserción escolar, sobre todo en San Lorenzo, deserción vinculada al carácter temporal del trabajo en las palmicultoras de la zona, lo que determina que los niños no permanezcan mucho tiempo en un mismo lugar.

En los planteles educativos de Esmeraldas y San Lorenzo las exigencias económicas que deben enfrentar los padres y madres de familia son menores que las registradas en otras ciudades del país; en general los maestros y maestras son más concientes de la situación socioeconómica de los hogares y responden a esta realidad, hay un nivel de flexibilidad pero al mismo tiempo de creatividad frente a las carencias, que demuestran un compromiso con la niñez y juventud y una preocupación por facilitar el acceso a la educación.

Este escenario óptimo para la acogida, se ve ensombrecido por las condiciones mismas en que se debate la educación, en una provincia que registra un índice de desarrollo educativo 8 puntos por debajo del que se registra a nivel nacional, donde el analfabetismo funcional alcanza el 29.4% de los adultos y; apenas el 56% de la población tiene primaria completa y un 17.9% secundaria completa. Del total de establecimientos educativos fiscales primarios que funcionan en el sector rural de la provincia el 43% son unidocentes. Porcentajes más altos de escuelas unidocentes se registran solamente en las provincias de Manabí en la Costa, Loja y Bolívar en la Sierra y todas las provincias de la Región Oriental.

Pero aun dentro de la provincia hay diferencias notables, es evidente que el Cantón Esmeraldas se encuentra en mejores condiciones que el resto de cantones de la provincia y San Lorenzo, en las peores, a veces, en algunos campos, solo es superado en abandono y pobreza por el cantón Eloy Alfaro.

En este cantón el analfabetismo alcanza al 16.9% de la población mayor de 15 años, en la zona urbana alcanza el 10.1% y en la zona rural es del 25%, estos índices son superiores en 5 puntos a la media provincial. El analfabetismo funcional en San Lorenzo es del 37%, de los cuales 26.6% corresponden a la población urbana y

49.4% a la zona rural, lo que significa que 1 de cada 2 personas mayores de 15 años que viven en la zona rural de San Lorenzo no puede entender lo que leen, o no pueden dar a entender lo que escriben, o no pueden realizar operaciones matemáticas elementales².

En los últimos años, San Lorenzo ha visto duplicarse su población, no solo por la presencia de la población colombiana desplazada por el conflicto armado que vive el país, sino por la presencia de las empresas palmicultoras que llegaron a este cantón hace aproximadamente 10 años y atraen mano de obra de otras zonas y provincias del país especialmente de Quinindé, Santo Domingo y Manabí.

Pese a los recursos que ha recibido el cantón, la situación de servicios básicos e infraestructura continúa siendo deficiente, el énfasis de la inversión está en la “defensa y seguridad” entendidas como instalaciones militares y policiales, Claudio Zenón párroco de San Lorenzo dice: “Somos una población que está en la frontera, y por el mismo hecho de estar en frontera somos un pueblo abandonado, aquí se está invirtiendo más de tres millones de dólares para un muelle grande, enorme, para recibir barcos, pero no hay 600 mil dólares para adoquinar cuatro calles, dónde hay una población de 20, 25 mil personas”.

Dentro de la educación se ha realizado esfuerzos para dotar de infraestructura a los planteles educativos, sin embargo, hay todavía muchas cosas que hacer; algunas por pequeñas (como las 30 bancas que requiere una escuela o la batería sanitaria que solicita otra), no son consideradas por los organismos nacionales e internacionales de apoyo; otras tampoco son consideradas porque demandan mucha inversión.

Pero el problema fundamental de San Lorenzo no es la infraestructura sino los maestros; hay escuelas que siendo fiscales no cuentan con maestros pagados por el fisco, sino que reciben una bonificación de 80 dólares entregada por la municipalidad, otros trabajan con una bonificación que reciben de las empresas palmicultoras, los montos varían entre 40 y 120 dólares.

Pese a la sobrepoblación estudiantil que tienen algunos maestros y maestras no se registran casos de discriminación o negación de matrícula, con lo cual podemos decir que el ingreso de los niños, niñas y jóvenes al sistema educativo está garantizado, y es una de las mayores preocupaciones de los docentes “que todos tengan acceso” pero no pueden asegurar calidad.

Hay muchos factores que impiden que San Lorenzo ofrezca a sus estudiantes una educación de calidad.

Entre ellos:

El carácter unidocente de la mayor parte de planteles educativos que funcionan en el área rural y que no cuentan con apoyos metodológicos que orienten el trabajo en el

² “Para propósitos de medición, se considera como analfabetos funcionales a aquellas personas que han asistido a la escuela primaria tres años o menos”².

aula, algunos maestros y maestras con creatividad tratan de suplir las deficiencias pero son experiencias individuales y aisladas.

Estuardo Quiñónez de la escuela “Mi patria” de Mataje afirma “Si se quiere ofrecer una educación de calidad por lo menos necesitaría un profesor por aula pero nuestra preocupación y la de los padres de familia es que estamos brindando una educación obsoleta porque tenemos un profesor para dos y tres grados y eso dificulta el aprendizaje”.

La presencia de un gran número de maestros bonificados que responden a diversas directrices, impiden los procesos de planificación integral y la implementación de sistemas de control y conduce al permanente cambio de la docencia dentro de los planteles educativos.

El carácter de maestros bonificados les limita también en el acceso a programas de capacitación y cuando acceden a ellos, éstos no les reportan beneficios en el reconocimiento de su desempeño laboral (los maestros y maestras fiscales tienen como aliciente de la capacitación el ascenso de categoría) los maestros bonificados no; tomando en cuenta además que las capacitaciones contemplan temáticas y se organizan más en función de criterios de los agentes externos y de las instituciones promotoras antes que responder a las demandas de la docencia.

Por otro lado su condición de frontera y la cercanía de los actores armados del conflicto colombiano determina la existencia de riesgos e inseguridades que limitan el ingreso de maestros calificados a determinados sectores de la zona rural, quienes acceden a servir en estas áreas, en algunos casos, son personas no calificadas para la docencia pero que hacen su mayor esfuerzo por cumplir la misión.

Algunos maestros han logrado que sus partidas sean reubicadas en planteles de la ciudad lo que ha significado el cierre de escuelas ubicadas en el cordón fronterizo, entre ellas una escuela de Alto Tambo que lleva cinco años cerrada, y la del Pan que lleva dos años; según las autoridades educativas de la Red San Lorenzo algunos de los niños se encuentran estudiando en las escuelas de la ciudad, lo que ha significado el abandono de las tierras de cultivo por parte de la comunidad, que ahora quiere regresar.

Respecto a esta ausencia de los maestros dicen los y las docentes: “Muchas veces se crea la escuela, se pone el profesor y él tiene que vérselas con todo un problema; no solo es el maestro es: conserje, electricista, plomero y director y además tiene que enfrentar solo los problemas de seguridad ¿dónde están los militares para apoyarle? No hay. Por ejemplo el campamento que hicieron, más bien dicho el destacamento militar de la Armada Nacional, está en Mataje, pero lo que corresponde a la zona norte, que está en el lugar donde inician los hitos, en Piedra Sellada, por ejemplo, no hay nada, allá no hay nada, si hacen sus recorridos por ahí son esporádicos, en esas condiciones ¿qué seguridad va a haber? Si ellos aparecen por ahí más peligro causan, porque llegan asustan y se van; entonces si existiera prácticamente una seguridad permanente, habría respaldo, la gente estaría más organizada, el maestro podría trabajar pero no existe respaldo, ninguna garantía, entonces la gente tiene que actuar como le dicta su instinto”.

También son límites para la calidad las condiciones socioeconómicas y culturales de los padres de familia, que impide a los estudiantes contar con los materiales mínimos para el aprendizaje y el apoyo para reforzar el trabajo del aula; dice una maestra: "Uno trabaja con lo que hay en la zona, pero siempre se necesita material de apoyo para que el niño aprenda mejor, practique en la casa y ese material no tenemos, solo contamos con los recursos que nos ofrece el medio y por importante que sea siempre es limitado".

Finalmente se ubica como problema la permanente movilidad de los estudiantes junto a los padres de familia, cuando hay trabajo algunos niños y niñas participan en el trabajo familiar, y en otras se quedan como responsables de hermanos menores mientras sus padres van a las faenas.

Estos problemas de la realidad educativa del cantón San Lorenzo afectan por igual a la población local y a la población en situación de refugio, sus demandas y preocupaciones son coincidentes, pero las soluciones no pasan por la disposición humana de los actores del quehacer educativo, sino fundamentalmente por la construcción de una visión colectiva del quehacer educativo en el cantón y la voluntad política de llevarla adelante.

Se requiere de organización de los actores comprometidos y preocupados por la calidad de la educación. Para superar la dispersión de las acciones, se requiere de compromisos institucionales, que rebasen la búsqueda de protagonismos y promuevan la consolidación de una sociedad política, capaz de exigir y exigirse: acción coordinada, optimización de recursos, priorización de necesidades con criterios sociales, control social de las acciones y rendición de cuentas.

Quito, enero 2007